

# CONDICIONAMIENTOS CULTURALES DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA\*

Fabio López de la Roche\*\*

*El presente trabajo intenta mostrar, en una primera parte, una serie de aspectos relacionados con la especificidad del proceso político y político-cultural colombiano en el siglo XX en el contexto del desarrollo latinoamericano, y algunas de las transformaciones que se han venido desarrollando más o menos desde la década de los 80 en la economía, la sociedad, la política y la cultura.*

*En una segunda parte, llamaremos la atención sobre ciertos planos de la violencia asociados a la cultura política y la vivencia colectiva de la vida cotidiana en nuestro país, en el marco de unos procesos históricamente situados de socialización política y de conformación de un régimen comunicativo particular.*

*El trabajo intenta vincular estos factores o rasgos de violencia presentes en la cultura y la vida cotidiana, con una serie de planos macro-sociales relacionados con el funcionamiento, el no funcionamiento o el mal funcionamiento de nuestras instituciones políticas, jurídicas y sociales.*

*Trataremos de ilustrar algunas de nuestras reflexiones con ejemplos y circunstancias de la vida diaria en nuestro país.*

---

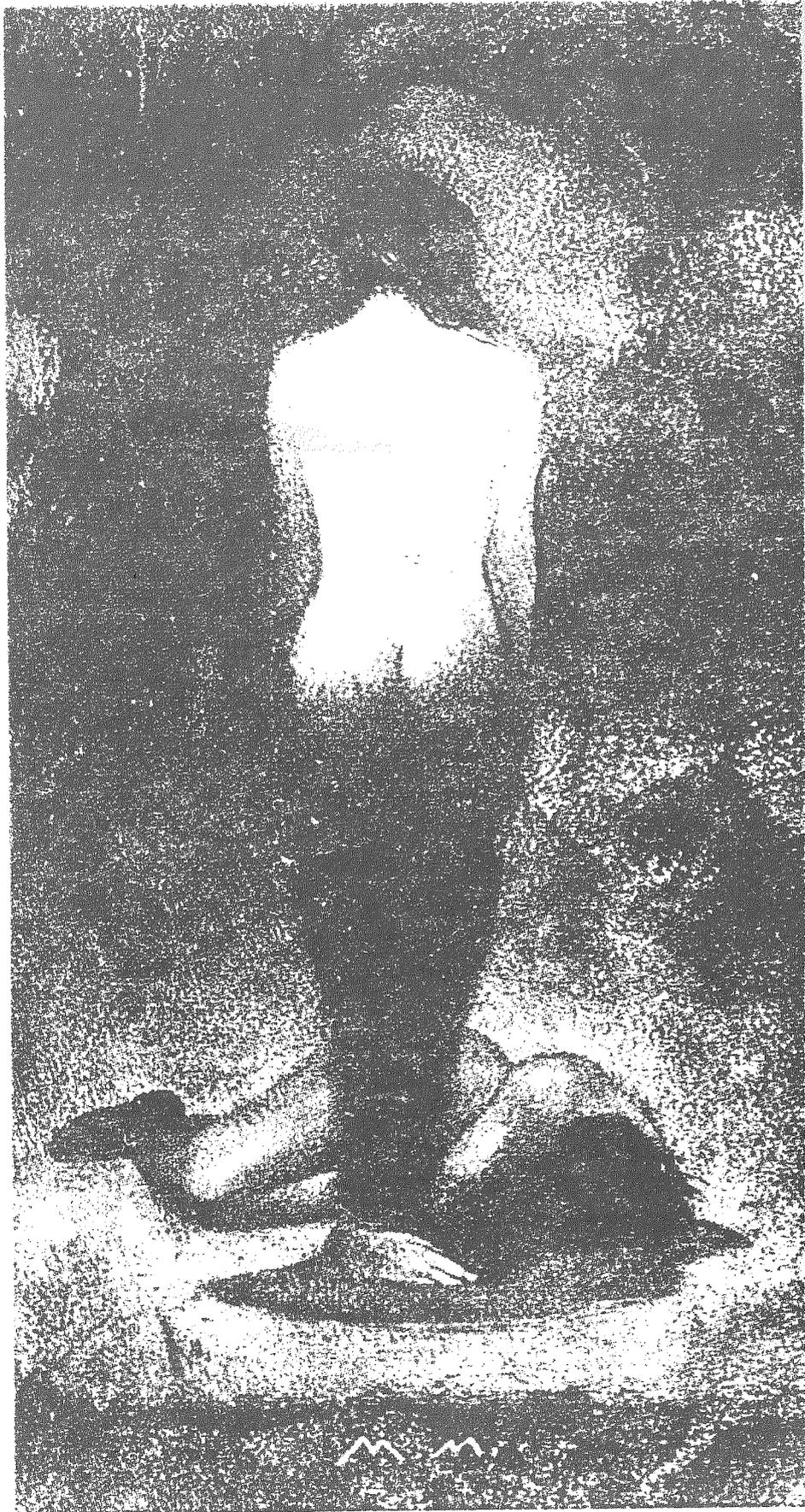
\* Ponencia presentada al Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología -ALAS. México, octubre 2-6, 1995.

\*\* Historiador, Politólogo, Profesor Facultad de Comunicación, Pontificia Universidad Javeriana.  
Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional.

# I.

## Colombia o el país inclasificable en las tipologías del desarrollo latinoamericano

Colombia experimenta, como otras sociedades de la región, una crisis de las formas tradicionales de hacer política. Vive una profunda crisis del sindicalismo, afectado por los cambios relacionados con la apertura económica y la reconversión laboral, y un desmoronamiento de las opciones políticas de izquierda, que no han podido asimilar la crisis de las utopías omnicomprendivas y la bancarrota de los sistemas socialistas del Este para reconfigurar un proyecto de izquierda democrática capaz de constituirse en una tercera competitiva al sistema bipartidista. Los partidos políticos tradicionales experimentan una crisis, que sin embargo, es distinta de la de agrupaciones políticas tradicionales en otros países de la región. Colombia no ha tenido partidos sólidamente estructurados, con carnetización, reunión periódica de sus militantes, o instancias de estudio o de formulación de políticas. Han sido más bien partidos de notables, oligárquicos en su espíritu, si bien policlasistas en cuanto a su composición social. Centran ellos prioritariamente su trabajo en la movilización electoral, no en plataformas programáticas, y para la mayoría de los analistas políticos constituyen federaciones de microempresas electorales, de feudos clientelistas regionales, que para las coyunturas eleccionarias aúnan sus esfuerzos y conforman alianzas temporales. La crisis de



estos partidos y de su capacidad de representación no es nueva. Ha estado presente a lo largo de los 80 y en la década de los 90. Sin embargo no es una crisis radical. Los partidos Liberal y Conservador han tenido una gran capacidad de adaptación y de renovación gradualista, moviéndose en una cierta tensión entre sus segmentos modernizantes y sus tendencias clientelistas. La crisis de la izquierda y cierta readecuación del clientelismo a las condiciones de la nueva Constitución de 1991, no permiten atribuir a los partidos tradicionales una crisis en su capacidad de representación, mayor de la que han tenido en los últimas décadas.

Colombia sufre también la crisis de los modelos socio-económicos generados después de la segunda postguerra, con la especificidad de no haber tenido fuertes gobiernos populistas e intervencionistas que fortalecieran el sector estatal. La tradición de manejo de la economía ha sido más bien de corte liberal, reacia al estatismo, y por ello mismo, las políticas neoliberales no tienen el mismo impacto en la organización estatal y social que en otras latitudes de América Latina. No obstante, y de manera similar a otros países de la región, con las políticas de reconversión económica y de apertura a la economía internacional, se observa también aquí cierta erosión del Estado como referente, alrededor del cual se habían constituido las identidades sociales de los actores colectivos a partir de los años 30 y 40. Hay que anotar, además, que Colombia no ha vivido los fenómenos hiperinflacionarios de otras economías latinoamericanas, con su efecto de erosión o de pérdida de legitimidad de las agrupaciones políticas tradicionales.

Tendríamos que agregar que la apertura de la economía al mercado internacional y la aplicación más radical de la política neoliberal ocurre en Colombia a comienzos de los 90, con el gobierno de César Gaviria (1990-1994), constituyendo por lo tanto, un fenómeno bastante más tardío comparativamente con otros países de la región. Es importante hacer esta precisión, pues tal circunstancia implica que no se vea muy claramente en nuestro caso la tendencia a la suplantación del Estado por el Mercado como nuevo principio de organización de lo social. Hay que anotar que en el partido liberal, en el poder durante los últimos 9 años, no ha habido unidad en cuanto al apoyo a una política económica neoliberal, y una de sus alas aboga por el mantenimiento del intervencionismo y la capacidad reguladora del Estado en una sociedad con profundos desequilibrios y fragmentaciones.

Otra de las características de la política colombiana en el siglo XX es no haber vivido un proceso de consolidación del populismo desde el poder, inicialmente frustrado con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 y posteriormente con el derrocamiento del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) en 1957. Esta no consolidación del populismo en Colombia probablemente haya tenido sus efectos culturales y simbólicos en cuanto a que en nuestro país no se habría dado cierta función reivindicativa del mundo de lo popular y de lo nacional presente en la política de los nacional-populismos triunfantes en otras latitudes de la región.

Un factor fundamental para la ubicación del caso colombiano en las tipologías de la evolución política de la región, es el no haber sufrido

en las décadas recientes un quiebre dictatorial. Por eso mismo es difícil ubicar nuestra experiencia en los parámetros construidos por los científicos sociales del Cono Sur para dar cuenta de los procesos de redemocratización y de transición a la democracia experimentados por Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.

El no haber vivido un quiebre dictatorial del juego político democrático, no implica que hubiéramos estado libres de intentos autoritarios como el que se produjo durante la administración Turbay Ayala (1978-1982) con sus políticas de represión, tortura y persecución a dirigentes del movimiento popular y de izquierda, así como a intelectuales y personalidades democráticas. Si bien no podemos hablar de redemocratización, en la medida en que no hemos experimentado una ruptura dictatorial, si podemos hablar de un cierto proceso de apertura política y de democratización, asociado a la promulgación y desarrollo de la Constitución de 1991. Se ha venido abriendo un espacio para la crítica de la tradición de intolerancia presente tanto en la cultura política dominante como en la oposición de izquierdas. Se desarrollan actualmente desde la sociedad y desde algunas instituciones estatales numerosos proyectos de educación para la democracia, la participación y la civilidad, de negociación y tratamiento político de los conflictos, así como programas de jueces de paz, de conciliadores en equidad y de participación comunitaria en la resolución de asuntos menores de justicia.

La Constitución del 91 fortaleció los procesos de reconocimiento de la pluralidad cultural constitutiva del país. Tenemos hoy una atmósfera más favorable para el reconoci-

miento de las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas. Sin embargo, no es muy clara la apertura al reconocimiento de otras opciones ideológico-políticas distintas a las de los dos partidos tradicionales (por ejemplo, a las de la política de izquierdas) Aquí parece expresarse cierta inercia político-cultural de exclusión anticomunista y anti-izquierdista heredada de las décadas precedentes.

Los derechos humanos como preocupación social han venido cobrando fuerza, en gran medida por la grave situación a este respecto y por las repercusiones negativas para la imagen y las relaciones comerciales del país. Sobra decir que la inclusión por los Estados Unidos en su agenda bilateral con Colombia, de la cuestión de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país como un tema prioritario, también ha llevado a tomar

un poco más en serio el asunto. La acción de las ONGs, de algunas instituciones estatales (Defensoría del Pueblo, Procuraduría) y de grupos de activistas de derechos humanos, ha logrado desmarginalizar la cuestión de los derechos humanos, sensibilizando a algunos sectores de la burocracia estatal y de la sociedad a este respecto. Sin embargo, la situación no es nada idílica, y no presenta la necesaria claridad en lo que respecta a la participación de agentes estatales en desapariciones y extralimitaciones.

La aceptación por cuatro de las organizaciones insurgentes (Movimiento 19 de Abril M-19, Ejército Popular de Liberación EPL (de ascendencia maoísta), Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y Movimiento Armado Proindigenista Quintín Lame) de la Carta del 91, significó una cierta relegitima-

ción de las instituciones. Por primera vez en nuestra historia reciente, un bloque altamente representativo de organizaciones de izquierda acepta el ordenamiento político-jurídico vigente y toma la decisión de moverse dentro del escenario legal pactado por la nueva constitución.

Pero la persistencia del conflicto armado del Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y con el Ejército de Liberación Nacional ELN, tiene graves implicaciones para el logro de una cierta transparencia y credibilidad de la democracia colombiana. El conflicto armado configura amplios márgenes para las violaciones de los derechos humanos de la población civil en las regiones de conflicto, tanto de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas como de los guerrilleros. Los abusos de la guerrilla apelando al secuestro y a imposiciones económicas a los hacendados para su financiación, han creado un clima enraizado de retaliación, de negativa rotunda desde ciertos sectores a diálogos de paz y a la aceptación de formas de expresión política de izquierda en el país. La presencia guerrillera en múltiples regiones de la geografía nacional y la imposibilidad de las Fuerzas Armadas de contrarrestarla, han dado pie a la conformación de grupos paramilitares financiados por los hacendados con el apoyo (no reconocido oficialmente) de las fuerzas militares oficiales, circunstancia que estimula las formas de justicia privada y la ausencia de monopolio oficial de la violencia legítima.

El carácter escalonado de los procesos de paz (no hay una negociación total con todos los grupos insurgentes, sino con una parte de ellos, permaneciendo otros en la insurgencia), no permite la gesta-



ción de un clima favorable a los procesos de reinserción a la vida civil de los grupos ya desmovilizados. En un ambiente de propaganda de guerra, de estigmatización de los grupos armados como delinquentes comunes (que se favorece por la misma práctica del secuestro y la «vacuna» de los grupos insurgentes y por las fronteras a veces muy laxas entre delincuencia política y delincuencia común), los guerrilleros desmovilizados experimentan el rechazo social en las resistencias de los empleadores a darles trabajo, y un compromiso muy precario desde el Estado por impulsar una política de reinserción susceptible de estimular la reconciliación nacional y de jalonar nuevos procesos de paz y de desarme.

La crisis del sistema de justicia (congestión de los juzgados, impunidad), el fenómeno del narcotráfico y su impacto corruptor sobre los distintos estamentos de la sociedad, así como el problema de la delincuencia común y los delitos contra la vida humana (alrededor de 33.000 homicidios anuales), complican mucho más el enrarecido panorama de la democracia colombiana.

La integración nacional es otro problema de suma complejidad. La guerrilla tiene en varias regiones periféricas y en algunas intermedias entre el centro y la periferia, el control político-militar, socio-territorial, y en algunas regiones incluso el control cultural a través de formas de civilización autoritaria de las relaciones sociales (expulsión por la vía de la intimidación, de drogadictos e indeseables sociales, eliminación de abigeos y delinquentes comunes, prescripción de determinadas formas de comportamiento familiar o de pareja, cumplimiento de funciones de policía y de justicia).

Volviendo a los rasgos positivos de la actual coyuntura, es necesario subrayar el actual proceso de cambio de la institución eclesiástica. Una institución marcadamente jerárquica y durante muchas décadas favorable al status quo como la iglesia católica colombiana,<sup>1</sup> en los últimos años (podríamos decir que en esta primera mitad de los 90) experimenta una redefinición sustancial hacia posiciones más autónomas con relación al *establishment*, y de mayor compromiso con la defensa de la vida y los derechos humanos, así como con las opciones de salida pacífica y negociada al conflicto armado.

Con relación al contexto cultural y comunicativo actual, hay que anotar que cada vez es más sentido el impacto de la extensión de la «sociedad informatizada» y de la «cultura mediática». Esta última aparece cada vez más claramente, y se expresó, en su novedad y en la inexperiencia de los actores y de sus promotores, en el debate televisivo entre los candidatos Samper y Pastrana en la pasada contienda presidencial. Un cierto reemplazo de la escena pública 'tradicional-moderna' (la argumentación programática, el peso del periódico en su versión racional-iluminista y en su carácter de cultura letrada, la identificación ideológico-partidaria del candidato), por la escena electrónica (aparición del 'creativo' político, búsqueda de formas mediáticas de puesta en escena y de seducción de masas), empieza a abrirse paso en la política colombiana. El triunfo del matemático y filósofo independiente y ex-rector de la Universidad Nacional Antanas Mockus en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, fue producto en buena medida de la visibilidad lograda por su propuesta en los medios de comunicación, y consti-

tuyó la expresión de la inconformidad de los bogotanos con las formas tradicionales de hacer política y con los partidos Conservador y Liberal.

Asistimos también a radicales transformaciones en la sensibilidad generacional de nuestros jóvenes. Los discursos pesados y la retórica ideológica parecen no ser de buen recibo. Como nos comentaba un dirigente sindical, los obreros jóvenes ya no se aguantan discursos de más de cinco minutos, y las asambleas universitarias en las universidades públicas que duraban tres días seguidos, de 9 a.m. a 7 p.m., y que reunían a masas estudiantiles que se deleitaban y pertrechaban con discursos ideológicos recurrentes, son hoy día una reminiscencia lejana de un tiempo superado. Al parecer los jóvenes se inclinan por una vivencia de la vida más 'cool' y más 'light', menos marcada por la intención de renuncia a sí mismos y más preocupada por la búsqueda de un principio de felicidad y de autorrealización.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> No nos referimos por supuesto, al Frente Unido de Camilo Torres Restrepo en los 60, al grupo de Golconda, al papel del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP de la Compañía de Jesús, o a las comunidades eclesiales de base, instituciones y movimientos identificados con una perspectiva de favorecimiento de los intereses de los grupos más pobres y marginados de nuestra sociedad.

<sup>2</sup> Sobre ese elemento llama la atención Manuel Antonio Garretón en «Transformaciones culturales y representación política», en Revista de Crítica Cultural, Santiago de Chile, No.5, julio de 1992, p.10

## II.

### Algunos condicionamientos culturales de nuestra violencia

En esta segunda parte queremos llamar la atención acerca de una serie de factores culturales que configuran cierta proclividad a la violencia en distintos sectores y grupos de nuestra sociedad.

Haremos referencia al problema de la ausencia de un conjunto de normas definidas consensualmente y acatadas por el conjunto de la población; a ciertas tradiciones de intolerancia política y cultural arraigadas en la vida colombiana; al mundo cultural y valorativo de los actores de nuestros conflictos, y a la relación del pensamiento y la práctica democráticos con las actitudes de los seres humanos ante el conocimiento y la cuestión de 'la verdad'.

Recurriremos en nuestra exposición, a algunas descripciones y a algunos ejemplos concretos tomados de nuestra vida diaria, para visualizar más claramente algunas de nuestras reflexiones y teorizaciones.

### Socialización en el desorden y violencia cotidiana

Muchas de las expresiones de violencia presentes en nuestra vida cotidiana tienen que ver con la socialización de la población en una tradición histórica y en unos contextos sociales e institucionales marcados por la ausencia de un orden democrático acatado por la población que provea a ésta de un conjunto de normas de convivencia, y le depare ciertos niveles de cohesión social y de integración normativa.

Miremos un caso de la vida diaria en Bogotá y es el de la asistencia de los bogotanos a cine en el Teatro Embajador. Para la entrada a las películas de mayor éxito se producen largas colas, y ante esto ha aparecido una mafia de intermediarios que por el pago de cierta suma de dinero ubican a las personas que aceptan la transacción en un lugar privilegiado de la fila, irrespectando el tiempo y el derecho de quienes han llegado temprano y

aspiran a ocupar un buen puesto en el teatro. El espectáculo es grotesco por la desfachatez agresiva de estos singulares empresarios del abuso, que llega a generar protestas y en ocasiones conatos de pelea. Pero además de grotesco, expresa claramente, en aquellas personas que le hacen el juego a este insólito negocio, el individualismo agresivo y la insolidaridad de muchos habitantes bogotanos para quienes el interés colectivo simplemente no existe y para quienes la satisfacción de sus intereses individuales al costo que sea, es su ley de leyes. Paradójicamente, me tocó observar esta situación en los días en que se exhibía «La Estrategia del Caracol». El mensaje de su director Sergio Cabrera en términos de rescate del sentido de lo colectivo, del respeto al otro y del valor de la solidaridad, resultaba muy pertinente luego de lo vivido a la entrada. Si en la cinta la policía aparece formalista, claramente comprometida con el poder y auspiciando insensible el desalojo de los morado-



res de un inquilinato, acá en la vida real de nuestra antesala a la película, ni siquiera estaba presente, y cuando llegó, lo hizo para poner orden a la brava sin enterarse de qué era lo que efectivamente pasaba, y cuando el abuso ya estaba consumado.

Me he extendido en la narración de este episodio en la medida en que muestra cómo se reproduce, en un escenario aparentemente sin ninguna importancia para la práctica democrática, la insolidaridad y la desconsideración hacia los demás, en gran parte debido a la ausencia de mecanismos de regulación o de arbitraje social de los pequeños conflictos de la vida cotidiana.

Comportamientos individualistas similares y mucho más graves en cuanto a la erosión de la convivencia, se pueden observar permanentemente en la vida colombiana y no solamente en la capital. La precariedad del Estado en nuestro caso, la no extensión de su cobertura social e institucional sobre la totalidad del territorio, la frágil legitimidad de las instituciones políticas, la corrupción administrativa, la legitimación tácita del ascenso social a través del contrabando o del tráfico de narcóticos, la ausencia de monopolio oficial sobre la fuerza, los abusos y la falta de transparencia de las instituciones policial y militar, son sólo algunos de los factores que inciden en un clima ético de no respeto a normas y de frecuente percepción del orden por parte de muchos sectores de la población como un orden ilegítimo y por ende transgredible.

La impunidad, la crisis del sistema de justicia o la ausencia a veces total de ésta en algunas regiones del país, estimula poderosamente las salidas individualistas, las soluciones de justicia «por mano propia» a los conflictos, y consecuentemente,

la no configuración de una cultura jurídica democrática por parte de la población. Hace unas semanas tuvimos oportunidad de ver en un noticiero de televisión el caso del intento de robo de un niño por parte de un individuo. Este fue sorprendido en el momento del rapto del menor por un grupo de personas que al percatarse del hecho, le persiguieron, le dieron alcance e intentaron lincharlo. Al ser entrevistada, la persona que encabezaba la persecución del plagiario expresó: «Nosotros queríamos lincharlo, pero desafortunadamente llegó la policía». He aquí una buena muestra de las concepciones, pero también de las prácticas, que algunos sectores de la población manejan acerca de la ley, el orden y la justicia.

La no presencia o la presencia precaria e insuficiente de instituciones estatales sobre todo en regiones de colonización, pero también en muchas zonas marginadas de nuestras metrópolis y ciudades intermedias, ha llevado a la constitución en ellas de poderes autoritarios representados por la guerrilla o por grupos paramilitares o de autodefensa (en el caso de las ciudades las milicias) que suplen así la ausencia del Estado, asumiendo funciones tributarias y de impartición de justicia, de organización de la población y de policía. Como bien lo han mostrado los trabajos de Alfredo Molano (véase por ejemplo «Aguas Arriba» sobre el caso de Guainía), muchas poblaciones han crecido y vivido un proceso de socialización política a través de esas formas de civilización autoritaria de las relaciones sociales.

Numerosos colombianos han terminado acatando y en ocasiones apoyando decididamente poderes paralelos, que así sea por la vía del autoritarismo y de la intimidación,

procura a los habitantes unas reglas de juego y un modelo de orden que posibilita ciertos niveles mínimos de convivencia a esas comunidades.

Resumiendo los argumentos y ejemplos planteados en este aparte, podemos decir, con Fernán González, que «la sociedad colombiana parece resistirse a verse representada y regulada por el Estado como ámbito público de resolución de conflictos, lo que implica una proclividad para la búsqueda de las soluciones privadas o grupales, frecuentemente violentas, a dichos conflictos».<sup>3</sup>

Las alternativas ante los problemas aquí esbozados se han señalado en múltiples diagnósticos oficiales y no oficiales de la crisis colombiana: agilizar y modernizar el sistema de justicia, acabar con la impunidad, combatir la corrupción, extender la

<sup>3</sup> González, Fernán, «Deslegitimación de lo político, Estado y Sociedad», en Coyuntura Política, Boletín de la Corporación Diálogo Democrático, Año 2, Número 6, Santafé de Bogotá, abril de 1994.



cobertura social e institucional del Estado a las zonas marginadas urbanas y rurales, avanzar en la depuración de la policía y de las fuerzas armadas y en el logro desde ellas de una actitud más favorable al respeto de los derechos humanos (reestructuración de la Policía Nacional y reforma a la Justicia Penal Militar), etcétera.

Quisiera anotar tres ideas adicionales para concluir este aparte:

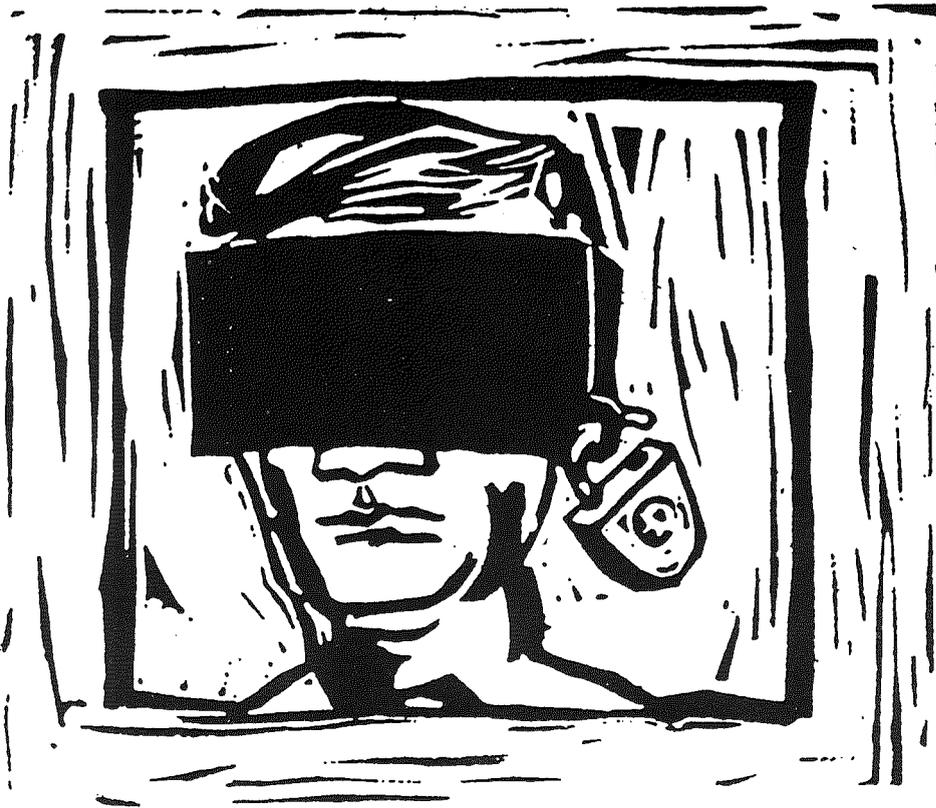
**Primera:** estas tareas hay que llevarlas a cabo con la gente, con liderazgo, con el apoyo y la convocatoria de la opinión pública; que la gente sienta que participa en ellas. Desafortunadamente y en la gran mayoría de los casos, la política colombiana se hace sin la gente (a pesar de las consignas electorales del «tiempo» y «la hora de la gente»!). Se hacen procesos de paz y procesos de reinserción de bajo perfil, sin convocatoria a la socie-

dad, perdiéndose así valiosas posibilidades y espacios para ir gestando progresivamente una cultura de la reconciliación nacional. La lucha contra la impunidad, por la agilización y modernización del sistema de justicia, por su extensión a zonas marginales como Urabá, para poner sólo un ejemplo, debería constituir una empresa colectiva, capaz de arrojar resultados progresivos y tangibles, de tal forma que los ciudadanos puedan sentirse partícipes y co-responsables en la construcción del orden deseado.

**Segunda:** el país requiere de mayor claridad en la relación con el narcotráfico. Somos conscientes que dadas las dimensiones del fenómeno y sus ramificaciones en la sociedad, es un problema superable sólo en el largo plazo y que no puede ser resuelto a partir de la adopción de actitudes y políticas de fundamentalismo moral. No obs-

tante, y dado el impacto que el narcotráfico ha causado sobre la sociedad (incidencia en el sistema de justicia, en el manejo oscuro del mundo del fútbol y de los sentimientos e intereses a él asociados, en la re-concentración de la propiedad de la tierra, en la militarización de muchos conflictos regionales, en la alteración de la escala de valores de distintas clases y grupos, de sus parámetros de ascenso social y personal, etc.), se precisa un rediseño democrático de la sociedad colombiana y de sus instituciones. Este fenómeno, este actor social y este problema, debe ser objeto de un tratamiento claro como factor de conflicto, de erosión del tejido social, de corrupción y de envilecimiento del sentido del trabajo. Sería deseable que las claridades en términos de si somos, de si queremos ser o no queremos ser una narco-democracia, provengan más de nosotros mismos y de nuestra propia capacidad de orientación de la política colombiana, que de las impugnaciones y exigencias de la política norteamericana.

**Tercera:** La solución política y negociada del conflicto armado debe ser una tarea de prioritaria atención. Ella, a través de la progresiva desaparición de la insurgencia armada a la que daría paso, estimularía la recuperación del campo para la inversión y el trabajo, crearía un clima favorable para la extinción progresiva de otros aparatos armados, y posibilitaría la extensión a todo el territorio nacional de una institucionalidad democrática única, superando los para-estados y las múltiples para-institucionalidades actuales. Podría generar además, condiciones favorables para el desarrollo de una cultura política donde la violencia pierda peso como instrumento de la acción política y donde los recursos legales e insti-



tucionales adquieran una nueva dimensión como instrumentos del cambio social. La desaparición del fenómeno guerrillero por la vía de la negociación y la consecuente conversión de sus segmentos más políticos junto a sus bases sociales en partidos o movimientos representativos de los intereses de determinados sectores de la población, constituiría para las instituciones políticas colombianas una ganancia en cuanto a su legitimidad, y una posibilidad de ampliar la representación de los sectores subalternos, hoy día no muy clara dentro de nuestro sistema político (precisaría que los partidos de izquierda o las formas políticas de representación no son, por supuesto, las únicas formas de representación de los intereses de los sectores populares).

Otra importantísima consecuencia de la desaparición del conflicto armado sería el cambio de función de las Fuerzas Armadas, que relevadas de su papel protagónico en el manejo del orden público y de las labores de contrainsurgencia, tendrían unos márgenes menores para verse involucradas en situaciones proclives a abusos y violaciones de los derechos humanos, y en el plano cultural y formativo podrían levantarse en un imaginario y en una visión del mundo más plural y abierta al reconocimiento de la diversidad política, ideológica, étnica y cultural de la sociedad (en un mayor respeto al dirigente popular, al líder indígena, al militante de izquierda, al sindicalista, etc.

### **Significaciones hegemónicas en la cultura política y formación de representaciones desde los individuos**

En cada cultura nacional y como resultado de un proceso histórico intersubjetivo en el cual interactúan los individuos, la escuela, la familia, los medios de comunicación, la iglesia, el Estado, los partidos políticos, los dirigentes nacionales y regionales, etc., se constituyen una serie de significaciones, representaciones, valores y comportamientos hegemónicos, los cuales coexisten junto a otros correspondientes a minorías o subculturas presentes también en el escenario nacional. Cada país en cuanto cultura nacional hegemónica, tiene sus propias tradiciones y sus rasgos particulares de cultura política. Como bien lo ha anotado Clifford Geertz cada cultura produce su propio universo de significaciones: «Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones».<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Geertz, Clifford, *La interpretación de las culturas*. Gedisa Editorial, Barcelona, 1989, p.20.

El análisis comparativo (historia comparada, culturas políticas comparadas, política comparada, etc.) puede ayudar a mirar las diferencias entre distintas culturas nacionales a nivel por ejemplo, de América Latina, pero también a reconocer peculiaridades del desarrollo de cada país. Conceptos como «democracia», «participación», «justicia», «política», «nacionalismo», etc., adquieren una significación particular en el contexto de cada cultura política nacional. Nos parece necesario subrayar la importancia de los estudios comparativos para una valoración menos provinciana, más ecuánime y más universal de los problemas colombianos. Si bien la Violentología ha contribuido a plantear alternativas a muchos de nuestros conflictos e incluso ha posibilitado el desarrollo de la historia regional a través de investigaciones históricas sobre la



Violencia en las distintas regiones del país, las Ciencias Sociales Colombianas requieren insertarse en una perspectiva más universal, menos instrumental, que relacione nuestra trayectoria y nuestros problemas con conflictos similares o distintos en otras latitudes y que nos provea de mayor bagaje y de más mundo para valorar nuestra propia realidad y para imaginar enfoques y soluciones nuevas a nuestros problemas.

Para explicitar la idea arriba expresada sobre la pertinencia de los estudios comparativos, quiero citar a José Joaquín Brunner en un ensayo en donde intenta mostrar algunos rasgos de la tradición político-cultural chilena hegemónicos por lo menos hasta 1973. Prestemos atención al texto en cuanto nos muestra una trayectoria de cultura política notoriamente distinta de la colombiana. Nos dice así el sociólogo chileno:

*El régimen comunicativo de la sociedad chilena hasta 1973 se basó en la política, la ley y la escuela. Fue, por tanto, la expresión del predominio en el espacio público de las clases medias, con su apego al formalismo legal, su valoración de la enseñanza y su uso de la política como medio de organización y fomento de la integración nacional. Estos tres medios de control social definieron una comunicación que aspiraba a la igualdad, al universalismo y al participacionismo. Crearon una esfera pública regida por los valores de la palabra; donde lo que importaba era, en última instancia, la capacidad de los diversos grupos de movilizar sus intereses bajo la forma de un discurso persuasivo. Las ideologías, como proyectos colectivos de acción en torno a imágenes de una «sociedad posible» y de un «buen orden», ocupaban el centro de la escena pública. El reformismo primero y luego el revolucionarismo arrancarían asimismo de esas tres fuentes. Tendrían un fondo legalista, escolarizado y de absoluta fe en los poderes transformadores de la política. En suma, la ley, la escuela y la política conforman un medio público, un régimen comunicativo, que es tendencialmente integrativo, que gira en torno al ciudadano, que valora el conocimiento certificado, el discurso y los proyectos colectivos.*

Más adelante, refiriéndose al tipo de estado configurado en su país, Brunner anota que «de hecho, el Estado representó en Chile, durante este período que llega hasta 1973, la encarnación de esas figuras que regulaban el régimen comunicativo de la sociedad. Fue a la vez un Estado providente, proteccionista, educador y transaccional. A este Estado suele llamársele en la literatura especializada un «Estado de compromiso». Buscó y promovió la negociación entre las diversas clases y grupos sociales; promovió mediante la escuela, la ley y la política la movilidad social, primero que todo la de las propias clases medias; y se afanó por distribuir las oportunidades de participación en la esfera pública con miras a lograr la legitimidad, aunque no siempre obtuviera la eficiencia».<sup>5</sup> Cualquier conocedor y observador atento de la historia y la cultura política colombiana que revise desde una intención comparativa este excelente conjunto de ensayos de Brunner titulado *Un Espejo Trizado*, se percataría de la diferencia en cuanto a trayectoria de cultura política entre los dos países. Retomando la cita arriba transcrita, tendríamos que reconocer que en nuestro



<sup>5</sup> Brunner, José Joaquín, *Un Espejo Trizado*. Ensayos sobre cultura y políticas culturales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Santiago de Chile, 1988, pp.67-68. Las negrillas son cursivas en el texto de Brunner-F.L.

caso no hubo tal centralidad de la ley en la vida de la sociedad, ni protagonismo y autonomía de las clases medias. Tampoco participacionismo como actitud imperante en la política, ni mucho menos un funcionamiento de ésta como integración y transacción.

Tal vez mucho de lo que Brunner describe como característico del régimen comunicacional y político-cultural chileno anterior a 1973, apenas empieza a despuntar en Colombia como posibilidad.

### **Intolerancias inerciales e imaginarios de los actores de nuestros conflictos**

En la Colombia contemporánea, distintas tradiciones de cultura política han sembrado, junto a un conjunto de elementos positivos y constructivos, una serie de factores de desgarramiento del tejido social, de autoritarismo, exclusión e intolerancia.<sup>6</sup>

Quiero introducir este tema relatando un suceso ocurrido a finales de los 70 a una pareja amiga. Viajaban ellos en su carro por la carretera Popayán-El Tambo cuando escucharon por la radio la información acerca del accidente de un bus en que viajaba un grupo de miembros del Partido Comunista que se desplazaban hacia algún evento. Minutos antes, estos amigos habían recogido en el camino a una campesina que les había pedido que la llevaran hasta un lugar cercano en la ruta que ellos llevaban. Al escuchar la noticia, la campesina anotó: «¡Pero, menos mal que eran comunistas!».

El anterior suceso, aunque a algunos pudiera parecer casual o excepcional, no lo es. Desde mi investigación sobre izquierdas he llamado la atención sobre el arraigo de actitudes de intolerancia anticomunista y antizquierdista en la cultura política bipartidista y en la vieja cultura eclesiástica colombiana, derivadas en buena medida de la relación conflictiva establecida por la iglesia católica con los valores de la modernidad (con el liberalismo, el libre exámen, el socialismo, la libertad de cultos, el comunismo, la revolución social, etcétera). Este tipo de relación con los valores del mundo moderno se expresó, en el caso concreto de la inculcación a la población de valores y actitudes anticomunistas, no sólo en la prédica desde el púlpito, sino en los manuales de enseñanza de la religión y de la historia como la «Histo-

ria de Colombia» de Rafael María Granados S.J. y las «Nociones de Historia Religiosa» de Bruño, más comúnmente conocida como «Historia Sagrada», para citar sólo algunos textos que se usaron durante décadas en la educación formal.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Véase mi trabajo «Tradiciones de cultura política en el siglo XX» en Cárdenas, Miguel Eduardo (coord.), *Modernidad y sociedad política en Colombia*, FESCOL-Foro Nacional por Colombia-Instituto de Estudios Políticos Universidad Nacional, Santafé de Bogotá, 1993. También mi ensayo «Autoritarismo e intolerancia en la cultura política» en *Análisis*, No.6, CINEP, Santafé de Bogotá, 1992.

<sup>7</sup> Ver el aparte «Los rasgos de intolerancia en la cultura colombiana» en mi trabajo «Cultura política de las clases dirigentes en Colombia: permanencias y rupturas» en López, Fabio (comp.), *Ensayos sobre cultura política colombiana*, Controversia No. 162-163, CINEP, Bogotá, 1990. Ver también el capítulo «La sociedad colombiana de los años 60 y 70: contexto formativo de las izquierdas» en mi libro *Izquierdas y cultura política: Oposición Alternativa?*, CINEP, Santafé de Bogotá, 1994.



Tal vez por lo anterior, pero también por las dificultades del comunismo colombiano y de la gran mayoría de las otras fuerzas de izquierda para asimilar la tradición nacional y para lograr un arraigo sólido en la historia y la cultura colombiana, mientras en Chile durante muchas décadas «ser de izquierda» llegó a ser sinónimo de «ser demócrata», en Colombia hasta nuestros días en el imaginario de los colombianos se mantiene una connotación negativa de «ser de izquierda», que se asocia a ser «peligroso», «potencialmente violento», «subversivo», «contestatario» y hasta «malo».

Habría que precisar que en la construcción de tal universo de significación juega un papel importante el manejo sesgado y muchas veces ideológico desde los medios de comunicación de los asuntos relacio-

nados con el mundo de las izquierdas, la dificultad para comprender que éste tiene que ver no sólo con la acción armada de la guerrilla, sino también con movimientos sociales, artísticos y culturales, utopías, ideales y formas de la sensibilidad colectiva.<sup>8</sup> Agregaría además, que en la producción de esa significación peyorativa o negativa juega también la desatención de los medios de comunicación hacia el mundo del sindicalismo, de las organizaciones no-gubernamentales, del magisterio y demás formas organizativas de los sectores populares.

En la cultura política de las izquierdas más ortodoxas y menos proclives a la redefinición de los viejos paradigmas construidos al calor del tiempo de los 60 y 70, se pueden observar también intolerancias inerciales derivadas de la visión clasista del Estado y de los medios de comunicación «burgueses», prevenciones hacia el funcionamiento estatal, apreciaciones esquemáticas del empresariado, de la iglesia y de las universidades de élite, visiones de los militares como ontológicamente perversos y violadores innatos de los derechos humanos, etc.

Estas intolerancias inerciales que tienen que ver con pautas de exclusión gestadas desde distintas ideologías y distintas tradiciones de cultura política, se han articulado con y se han nutrido además de las violencias, de los conflictos recientes y de los abusos contra la vida y los derechos humanos, cometidos en medio de ellos desde los distintos bandos. Cada víctima de estos distintos conflictos, siembra con frecuencia la semilla de la venganza, nuevos odios irreflexivos y visiones unidimensionales de aquel de quien vino o de quien se cree que vino la acción mortal.

### Democracia y actitud ante el conocimiento

La construcción o no construcción de una cultura democrática, la posibilidad de configurar actitudes abiertas o cerradas al reconocimiento de la diversidad y de la diferencia, tiene que ver con las maneras de concebir el conocimiento humano. En su novela «Cóncores no entierran todos los días», Gustavo Alvarez Gardeazábal, al mostrar la actitud del «Cóndor», León María Lozano, hacia la información, describe muy bien la relación que muchas veces se establece entre las personalidades autoritarias y un tipo singular de conocimiento de la realidad:

*Así y todo, Agripina jamás se llamó conservadora ni le preguntó nada a su marido de las cosas del partido. León María, sin embargo, la obligaba todas las tardes, mientras él tenía los pies en agua caliente, a oír los editoriales de El Siglo, que él leía en voz alta tratando de no olvidar la costumbre que adquirió cuando su padre quedó cie-*



<sup>8</sup> Véase la portada de las Lecturas Dominicales de El Tiempo (9-I-1994) dedicadas, paradójicamente, a comentar el libro del mexicano Jorge Castañeda La Utopía Desarmada, sobre las izquierdas en América Latina y sus redefiniciones actuales. La representación iconográfica que allí se hace de la izquierda bajo el título de «Se acabó la izquierda?» es la de una pedrea del estudiantado (más exactamente de sus grupos más extremistas) con la Policía en los predios de la Universidad Nacional. Uno se pregunta necesariamente sobre las razones para reducir el complejo mundo de las izquierdas a la representación visual de una pedrea de los guardias rojos y los «anarquistas» encapuchados con la fuerza pública.

go. No compraba ni leía otro periódico y no dejaba oír emisora distinta a *La Voz Católica*. Todo lo demás, o no era conservador o no era católico y ni a él ni a su familia les podía interesar. Por eso quizá tampoco leyó el mismo día la carta que contra él mandó un grupo de liberales de Tuluá, pues ésta había salido en *El Tiempo*. Mucho menos pudo leer las crónicas de Lino Gil sobre las huelgas de las trilladoras de Tuluá ni los escritos que Gertrudis Potes logró sacar en *Relator* engañando la censura.

No leía sino lo estrictamente indispensable para ser un buen conservador...<sup>9</sup>

Lo interesante en esta situación planteada por Gardeazábal, es que tal tipo de relación con el conocimiento y con la información, no es exclusiva de los viejos conservadores sectarios colombianos. Idénticas situaciones, casi que al pie de la letra de lo descrito por el escritor tuluense, podríamos encontrar en la actitud ante el problema de la verdad y ante la información, de parte de muchos militantes de la vieja izquierda. Las personalidades autoritarias pueden existir en las más distintas vertientes ideológico-políticas e independientemente de los discursos libertarios que a veces ellas vehiculen.

Un caso que impactó la opinión durante la pasada campaña presidencial, y donde se conjugan las intolerancias inerciales a las que nos hemos referido antes y la actitud ante el conocimiento y ante la diversidad de la sociedad, es el de las declaraciones de Monseñor Darío Castrillón exigiendo a los liberales católicos abstenerse de votar para presidente por Samper y

votar en blanco, con el argumento de que la alianza electoral del candidato liberal con los grupos cristianos podría «vulnerar la unidad de nuestro país». Los apartes más reveladores del pronunciamiento del arzobispo de Bucaramanga dicen así: «Yo le pediría al pueblo creyente liberal, que ante esta alianza con los protestantes, no se sintiera obligado a votar por un candidato de otro partido, pero que votara en blanco» (...) «Abierto a todos, amo a mis hermanos protestantes. Tengo óptimos amigos. El problema no es de amistad, es que no hay dos verdades, hay una sola, y si hoy la tenemos yo no quiero que se rompa» (...) «La Conferencia Episcopal ha dicho: 'Voten por el mejor'. ¿Qué significa eso?: Hay dos candidatos. ¿Cómo hace la gente para saber cuál es el mejor? (...) Desde el punto de vista de la fe, no hay duda que hay un voto que perjudicaría la unidad religiosa de la República y que crearía un problema más». (...) No podemos permitir que se vulnere más por inconsciencia la unidad de nuestro país».<sup>10</sup>

Las declaraciones de Castrillón revivieron sin duda viejas polémicas hace rato olvidadas, y nos recordaron las destrucciones e incendios de templos protestantes en el Tolima durante la Violencia al calor de las intolerancias político-religiosas de aquellos días. Pero lo que nos parece importante resaltar alrededor de lo expresado por este alto jerarca de la iglesia es, por un lado, la constatación de la presencia en nuestra cultura de sedimentaciones culturales muy variadas y complejas. Por otro, los retos que para el mundo cultural de muchos actores (seríamos simplistas si pensáramos que el problema se reduce a Darío Castrillón) plantea el reconocimiento de la diversi-

dad -en gran parte debido al miedo a la diferencia-, concebir la unidad en medio de la diversidad y no como una entidad monolítica y sin fisuras, y operar con concepciones de la verdad menos absolutas y unidimensionales y más abiertas al reconocimiento de otras ópticas, otras opciones filosóficas, políticas, religiosas y vivenciales.

<sup>9</sup> Alvarez Gardeazábal, Gustavo, *Cóndores no entierran todos los días*. El Ancora Editores, Bogotá, 1992, p.51

<sup>10</sup> «'Voten en blanco' pide Castrillón», en *El Tiempo*, domingo 12 de junio de 1994, p.15A



## A manera de conclusión

La sociedad colombiana, como resultado de las transformaciones socio-culturales vividas en las últimas décadas, pero también como país que se involucra en un proceso creciente de apertura económica y de internacionalización de su economía y de adaptación a las condiciones del nuevo orden mundial en gestación, experimenta una crisis de los viejos paradigmas de comprensión de la realidad.

La crisis de los países del llamado 'socialismo real' y de la vía revolucionaria de transformación de la sociedad, ha sumido a las izquierdas en la incertidumbre y en la necesidad de revisar muchos de sus anteriores postulados y redefinir su proyecto de sociedad. El fin de la bipolaridad este-oeste y de la guerra fría, ha erosionado los referentes de muchos sectores de la derecha y de aquellos sectores del estamento militar comprometidos con la ideología de la seguridad nacional y del 'enemigo interno' (aunque la persistencia del conflicto Estado-guerrilla en Colombia tiende a mantener cierta operancia de los viejos referentes).<sup>11</sup>

Con la apertura socio-económica y la reconversión industrial y laboral, (para no hablar del impacto de la crisis de las izquierdas sobre él), el sindicalismo experimenta también una profunda crisis y unos retos muy grandes a sus tradicionales formas de concebir la actividad sindical. En la economía asistimos también a la crisis del modelo sustitutivo y de los referentes cepalinos de orientación de la política económica. La anterior noción de soberanía se ve también fuertemente confrontada por los procesos de apertura econó-

mica, de internacionalización y de globalización.

Resumiendo los efectos de estas distintas crisis de los viejos referentes, podemos afirmar con Norbert Lechner que «nos encontramos en una época de mutaciones en que los mapas mentales se trastornan. Las anteriores claves interpretativas pierden validez y todavía no se afianzan nuevos códigos. Muy diferentes diagnósticos, opiniones y preferencias se yuxtaponen dando lugar a un ambiente de confusión, ambigüedades e incertidumbres. Me parece crucial retener este entorno cultural pues influye tanto en la percepción de los problemas y desafíos como especialmente al formar expectativas, imaginar soluciones y seleccionar los medios»<sup>12</sup>.

Teniendo presente los problemas derivados de esta situación de incertidumbre sobre los cuales llama la atención Lechner, -los que por lo demás plantean un gran reto a los medios de comunicación y a los formadores de opinión pública-, creo que hay que ver al mismo tiempo las eventuales posibilidades y los aspectos positivos de esta coyuntura. Me parece que el actual contexto puede ayudar a erosionar muchas de las intolerancias inerciales de la cultura política colombiana y a gestar un clima más favorable al diálogo y a la construcción de consensos y acuerdos parciales.

Pero las posibilidades de este nuevo contexto dependerán del manejo adecuado de nuestros distintos conflictos (Estado-guerrilla, delincuencia común-sociedad, Estado-narcotráfico, etc.), de la lucha decidida contra la impunidad, del crecimiento de la inversión social, de la implementación

de una estrategia económica para la paz, del fortalecimiento de las garantías del derecho a la vida, y de una política sostenida de afirmación de la legalidad, pero sobre todo de la legitimidad de nuestras instituciones democráticas.

<sup>11</sup> El artículo «Quiénes son los responsables? Un militar ante la violencia colombiana», del Inspector General del Ejército, General Juan Salcedo Lora, publicado recientemente («Lecturas Dominicales de El Tiempo», junio 26 de 1994, p. 8-10), nos parece que refleja muy bien las transformaciones que el nuevo contexto internacional está generando en la cosmovisión de los militares, como también cierta inercia de las maneras tradicionales de abordar el conflicto colombiano desde el estamento castrense.

<sup>12</sup> Lechner, Norbert, «Las sombras del mañana» en Colección Estudios CIEPLAN, No.37, Santiago de Chile, Junio de 1993, p.72

